LA TRANSICIÓN POLÍTICA Y LOS DILEMAS DEL PRI¹

LEOPOLDO GÓMEZ
JOHN BAILEY

UNA DE LAS MANIFESTACIONES MÁS visibles de una crisis en un sistema político es que el discurso político e intelectual se vuelca sobre el problema fundamental de la legitimidad: ¿qué características o elementos otorgan el derecho de gobernar? Ésta es justamente la situación que prevalece hoy día en los debates sobre el régimen presidencial mexicano. En esencia, lo que se discute es si una forma “evolucionada” de autoritarismo puede rescatar el apoyo de las mayorías y de la élite, o bien, si una liberalización política que permita mayor pluralismo y oposición partidista es necesaria o incluso inevitable. Cambios en una u otra dirección necesariamente se reflejarán en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha sido uno de los pilares del sistema político mexicano.

El restablecimiento del orden después del caos revolucionario a principios de siglo requirió una centralización e institucionalización del poder sin precedentes, lo cual se reflejó no sólo en la dominación del partido oficial por la presidencia sino también en el predominio de mecanismos de representación sectoriales dentro del propio partido. Dado el compromiso ideológico del nuevo régimen con formas de legitimación electoral, la solución al problema del orden sentó las bases de lo que actualmente parece ser la tensión fundamental dentro del PRI. Por una parte, el partido debía conducirse como una organización cupular capaz de reproducir el consenso entre las élites políticas y de asegurar su control sobre las masas; por la otra, se veía forzado a actuar como una organización electoral encargada de la legitimación democrática del régimen. Para cumplir su primera función, el PRI tenía que mantener un mínimo de congruencia ideológica con los valores revolucio-

¹ Federico Estévez, Carlos Sevilla y Miguel Ángel Valverde comentaron el manuscrito.

narios fundamentales y garantizar estabilidad en las reglas del juego político, particularmente las concernientes a la distribución de cuotas de poder entre los líderes de las organizaciones afiliadas a él. La segunda función demandaba, a su vez, que el partido ganase elecciones de manera más o menos creíble.

De 1945 a 1975 la vida política estuvo inmersa en un círculo “virtuoso”, donde el vertiginoso crecimiento económico, producto de la industrialización por sustitución de importaciones, era a la vez causa y efecto de la estabilidad política y la paz social. El crecimiento económico facilitó la movilidad social y elevó los niveles de vida en términos absolutos. Estos beneficios, aunados a liderazgos presidenciales generalmente aceptados, contribuyeron a promover la legitimidad del sistema. En estas condiciones, el papel que desempeñaba el partido como organización cupular no entraba en conflicto con su papel electoral. De hecho, su función electoral se veía reforzada por su naturaleza cupular, puesto que las organizaciones de masas del PRI eran suficientemente fuertes —en relación a la mayoría de los individuos no organizados y a los partidos de oposición— y el desarrollo económico suficientemente sólido como para limitar las posibilidades de oposición en el ámbito electoral. Las prácticas autoritarias dentro y fuera del PRI, si bien no exentas de críticas, eran toleradas por los grupos sociales más importantes.

La tensión entre las exigencias cupulares y las electorales en el PRI se vieron exacerbadas por dos tendencias. En primer término, debido a los efectos de la modernización, la sociedad que se encontraba fuera del círculo priísta creció. En segundo término, la inestabilidad económica posterior a 1975, que culminó con el desplome financiero de 1982, destruyó el antecedente de crecimiento y efectividad administrativa.

Como partido oficial, el PRI padeció las consecuencias de la crítica severa y el rechazo. Las elecciones, que habían servido de base para legitimar el régimen, comenzaron a convertirse en competencias en las que el voto de protesta rápidamente erosionaba la hegemonía priísta.

Los esfuerzos del partido oficial por “ofrecer un mejor producto”, bajo las exigencias de un mercado electoral cada vez más competitivo, propiciaron una serie de contradicciones que saltan a la vista. En el aspecto organizacional, el PRI es capaz de competir con mayor eficacia liberándose de sus compromisos sectoriales y adoptando procedimientos abiertos para la selección de sus candidatos. Sin embargo, estas reformas pueden alterar los arreglos políticos que sirven de base al partido para asegurar el consenso entre los dirigentes de organizaciones de masas. En lo que se refiere a su estructura, como partido oficial el PRI

disfruta de una serie de privilegios sobre la oposición, que incluyen la definición de la naturaleza y los límites de la contienda electoral. Comicios más justos requieren de un radical cambio de actitud de muchos priístas, hasta ahora acostumbrados a condiciones que prácticamente aseguraban su victoria. En el plano ideológico, el partido tiene que reconciliar medio siglo de "populismo" con una nueva estrategia macroeconómica basada en la liberalización financiera y comercial. La nacionalización de la economía, la planeación estatal, los programas básicos de bienestar, son todos principios fundamentales de la Revolución que deben ser modificados drásticamente con las nuevas políticas gubernamentales.

Si bien los dirigentes políticos continúan subrayando sus vínculos revolucionarios, así como los beneficios de la estabilidad y la paz social, se están dando a la tarea de forjar nuevas fórmulas de legitimidad, tales como la modernización y la democracia. Se percibe también un esfuerzo por fortalecer la organización territorial del PRI y por llevar a cabo elecciones internas para seleccionar candidatos. Se escucha una vez más la retórica sobre la separación del PRI y el gobierno y se promueve una reforma electoral que si bien continúa reservando privilegios para el partido gobernante, incluye modificaciones favorables para la oposición. Aunque todavía limitados, estos intentos reflejan una aceptación de la necesidad de cambio por parte del liderazgo político del país. La magnitud del cambio dependerá en gran parte del cálculo de los costos internos y externos de las reformas, es decir, de los costos de enfrentar a los pilares tradicionales del régimen *vis-à-vis* los de enfrentar a la oposición e, incluso, a amplios sectores de la sociedad.

Nuestro análisis se inicia con una discusión sobre el consenso, la legitimidad y la estabilidad. Continúa con una síntesis de las causas, alcances y límites de los cambios políticos más importantes —dentro y fuera del PRI— previos a 1988. Los dilemas e implicaciones para el partido oficial de la transición política que vive el país, marcada de manera singular por los comicios de julio de 1988, se analizan desde tres ángulos distintos. Primero, el del proyecto político del gobierno actual, el debate sobre la reforma del PRI y los principales actores en la batalla por el cambio dentro del mismo partido. Segundo, el de la dinámica electoral del presente régimen; y tercero, el de las últimas reformas a la legislación electoral y sus posibles consecuencias para el PRI. Concluimos con una evaluación de las posibilidades de reforma de este partido.

CONSENSO, LEGITIMIDAD Y ESTABILIDAD

Como ya se señaló, el PRI ha estado encargado tanto de reproducir el consenso entre las élites políticas como de proveer al régimen de un mínimo de legitimidad electoral. El consenso entre las élites constituye un pilar central de la estabilidad política.

Gobiernos que bien podían haber sido considerados como legítimos han fracasado, víctimas de los conflictos entre sus élites.² Por el contrario, sistemas rechazados abiertamente por grandes sectores de la población se las han ingeniado para sobrevivir por largos periodos, gracias a su habilidad para presentar un frente unido a sus opositores. La represión misma sólo puede ser sostenida si las élites permanecen unidas en su determinación de conservar el poder. Los recientes procesos de redemocratización en América Latina muestran la importancia de las fracturas en la élite —en particular dentro de las fuerzas armadas— en los procesos de transición desde regímenes autoritarios.³

Si bien el consenso entre las élites es primordial, su naturaleza varía de un tipo de régimen a otro.⁴ Así, en tanto que la dinámica democrática gira en torno a un consenso sobre procedimientos, en especial aquellos que tienen que ver con la participación ciudadana y las reglas para la expresión de la disidencia, los sistemas totalitarios hacen hincapié en un consenso de carácter sustantivo, caracterizado por la aceptación de una ideología oficial. Aunque el consenso que sustenta a los regímenes autoritarios es más de tipo sustantivo que de procedimientos, se basa en ideas imprecisas, tales como el nacionalismo, el populismo, la seguridad nacional o el desarrollo. Precisamente la vaguedad de estos conceptos apunta a la importancia de otro elemento en el mantenimiento del consenso entre las élites: el efecto combinado de los beneficios de la cooperación y de los costos —potenciales y reales— del disenso. En este sentido, la cohesión de las élites en estos regímenes descansa, en buena medida, en un consenso por conveniencia.

En México, la creación del consenso no fue tarea fácil.⁵ Por más

² Juan Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978.

³ Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1988.

⁴ Juan Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", en Fred Greenstein y Nelson Polsby (eds.), *Handbook of Political Science*, Reading, Addison-Wesley, 1975, vol. 3.

⁵ Para un análisis histórico del consenso y su importancia política, ver Luis Rubio, "Consensus and Stability: The Case of Mexico", tesis doctoral, Brandeis University, sin fecha.

de un siglo después de la Independencia, las élites conservadoras y liberales se enfrentaron en luchas sangrientas, cuyo precio incluyó la pérdida de casi la mitad del territorio nacional y la imposición de un emperador extranjero. Sólo una revolución pudo crear las condiciones propicias para el surgimiento de un mínimo de cohesión, producto —al menos inicialmente— de la propia experiencia revolucionaria y de un compromiso flexible con la ideología de la Revolución. Los acuerdos básicos fueron plasmados en la Constitución de 1917, cuyo proyecto global apunta hacia la creación de un Estado fuerte y conciliador, capaz de promover la modernización y de atenuar la explotación económica y la dominación extranjera.⁶ Si bien estos acuerdos tuvieron la ventaja de incorporar los intereses de las diversas facciones revolucionarias, por esa misma razón incluían objetivos potencialmente contradictorios: desarrollo económico y justicia social. La única manera de reconciliarlos era mediante el crecimiento económico sostenido.

La lucha por el poder continuó por más de una década después de promulgada la Constitución. Las ambiciones personales y la ausencia de instituciones políticas sólidas impedían la conciliación. Diez años de campañas militares venturosas por parte del gobierno nacional, seguidos por la creación del partido oficial, sentaron las condiciones necesarias para la conciliación. El partido aglutinó a la mayoría de los jefes revolucionarios, proporcionándoles un marco institucional para dirimir sus conflictos y distribuirse el poder. Con la “corporativización” del partido oficial, los dirigentes de las organizaciones sectoriales remplazaron gradualmente a los jefes revolucionarios, convirtiéndose en los ejes centrales de la maquinaria partidista. Así, una de las funciones principales del partido ha sido la conciliación y negociación de las demandas de los grupos campesinos, de la clase obrera y de los burócratas. Conservar la lealtad política de estos sectores requiere una distribución de cuotas de poder más o menos estable entre sus líderes, una de cuyas consecuencias ha sido la distribución sectorial de las candidaturas del partido. A cambio, los dirigentes sectoriales han estado dispuestos a movilizar a sus asociados en apoyo del gobierno. Al mismo tiempo, dichos líderes controlan a sus seguidores, limitando sus demandas y previniendo su movilización por opositores del régimen. Esto explica en gran parte el grado de control que el régimen ha tenido sobre la política económica y la estabilidad política.

Entre otras cosas, el “milagro” mexicano permitió la satisfacción —selectiva— de las demandas de las organizaciones populares en un

⁶ Arnaldo Córdova, *La ideología de la Revolución Mexicana*, México, Ediciones Era, 1981.

contexto de economía capitalista que redituaba grandes beneficios a los intereses empresariales. Aunque formalmente estos intereses nunca han sido parte del partido oficial, han tenido vínculos estrechos con el gobierno y su contribución ha sido esencial para el crecimiento económico y la estabilidad del régimen. Con la intensificación de los problemas económicos durante los años setenta y ochenta las posibilidades de satisfacer a todos esos grupos disminuyeron en forma drástica. Los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo favorecieron, por lo menos de manera retórica, los intereses populares, mientras que Miguel de la Madrid apoyó políticas de corte neoliberal. De esta manera, los primeros enajenaron a los empresarios y el último creó un distanciamiento con los grupos nacionalistas-estadistas dentro del PRI. En la medida en que los problemas económicos son mayores, la liberalización política se vuelve más importante para la legitimidad del régimen.

La legitimidad no es otra cosa que la creencia de que un conjunto de instituciones políticas es el más adecuado para una determinada sociedad. El predominio de la opinión de que es correcto y propio obedecer a las autoridades de un país es lo que las hace legítimas.⁷ Aunque en el corto plazo la legitimidad no es indispensable, en el largo plazo es fundamental para la estabilidad política. Por lo menos disminuye los costos de gobernar al reducir la necesidad de recurrir a la represión.⁸ Por esta razón prácticamente todos los regímenes, incluso los más autocráticos, buscan legitimidad. Tal como lo argumenta Weber al referirse a los sistemas de dominación, "todo sistema intenta establecer y cultivar la creencia en su legitimidad".⁹

Las fórmulas de legitimidad empleadas son por lo general complejas, compuestas por temas diversos. Sin embargo, existe un énfasis en cada tipo de régimen que refleja la naturaleza del consenso entre las élites. Así, los gobiernos autoritarios resaltan más los logros sustantivos que el respeto a ciertos procedimientos o normas. Aunque los argumentos para justificar la dominación autoritaria pueden ser variados, la mayoría de esos sistemas tiende a subrayar la eficiencia, sobre todo la relativa al desarrollo económico. Si bien la legitimidad en los regí-

⁷ Seymour M. Lipset, *Political Man: The Social Bases of Politics*, Nueva York, Doubleday and Company, 1963, p. 64; Juan Linz, "Legitimacy of Democracy and the Socioeconomic System", en Martin Dogan (ed.), *Comparing Pluralist Democracies: Strains on Legitimacy*, Boulder, Westview Press, 1988, p. 65.

⁸ Para un análisis psicológico sobre la eficiencia de la legitimidad véase Richard Merelman, "Learning and Legitimacy", en *American Political Science Review*, vol. 30, núm. 3, septiembre, 1966, pp. 548-561.

⁹ Max Weber, *Economy and Society*, editado por Guenther Roth y Claus Wittich, Berkeley, University of California Press, 1978, vol. 1, p. 213.

menes autoritarios descansa principalmente en logros sustantivos, las elecciones también son empleadas como mecanismos de legitimación. En condiciones normales éstas no son más que un mecanismo auxiliar, pero en situaciones de crisis suelen adquirir una importancia mayor. En términos de la práctica política la tensión principal gira en torno a las maniobras del partido oficial para sesgar la contienda electoral en su favor, frente a los reclamos de imparcialidad de los partidos de oposición y de los actores independientes, cuyas demandas tienen una gran resonancia entre los públicos atentos, tanto nacionales como extranjeros. Políticamente lo más importante es que un reto hostil a los reclamos legitimadores de un régimen puede minar la confianza y la determinación de las élites gobernantes y, en consecuencia, reducir su capacidad para manejar la crisis. Esta pérdida de confianza tiende, a su vez, a animar a la oposición y a incrementar la incertidumbre de una situación de por sí volátil.

Ésta es, en esencia, la situación de México; el deterioro económico se ha visto acompañado de mayores presiones para liberalizar el sistema político. Dados los orígenes revolucionarios del régimen, las élites políticas inicialmente destacaron la reforma social. Sin embargo, la consolidación del Estado posrevolucionario después de 1940 y la pérdida gradual del fervor reformista dieron lugar a un mayor énfasis en el crecimiento económico. Si bien no todas las consecuencias de éste fueron benéficas para el régimen —por ejemplo, la expansión de sectores medios cada vez más críticos—, en el corto plazo su efecto global fue positivo. No sólo brindó amplias oportunidades de movilidad social, sino que también demostró la efectividad del sistema. En estas condiciones las elecciones sirvieron primordialmente para confirmar la legitimidad sustantiva del régimen, aunque también tuvieron otras funciones como la asignación de cuotas de poder y la circulación de las élites.¹⁰

En la medida en que empezaron a brotar los problemas económicos y el comportamiento presidencial se tornó errático, la liberalización política adquirió una importancia creciente. Incapaces de ofrecer justicia social o un desarrollo económico sostenido, las propias élites empezaron a hablar de un “perfeccionamiento” de los procesos democráticos. Un avance notable en este sentido fue la reforma política de 1977, que legalizó varios partidos de oposición, garantizándoles algunos beneficios por su participación electoral. Aunque significativas, estas medidas pronto fueron superadas por la crisis económica de la última dé-

¹⁰ Sobre las funciones de las elecciones en México ver Soledad Loaeza, “El llamado a las urnas”, en *Nexos*, núm. 90, junio de 1985, pp. 13-20.

cada, que generó presiones sociales sin precedentes en favor de una mayor liberalización. El problema central es que una verdadera democratización bien puede minar el consenso al amenazar intereses de líderes y grupos políticos acostumbrados a considerar el poder como un recurso patrimonial. La mayoría de ellos, renuente a compartir el poder con los partidos de oposición, también rechaza la creación de mecanismos democráticos dentro de su propio partido, mecanismos que evidentemente adquirirán mayor importancia en la medida en que se creen condiciones electorales más competitivas.

LAS RUTAS DEL CAMBIO POLÍTICO EN MÉXICO

El PRI fue creado y con el paso del tiempo remodelado por caudillos poderosos como un instrumento central de un estado fuerte.¹¹ El objetivo era construir un sistema que incluyera a las fuerzas políticas más significativas, sin darle cabida a la oposición legítima (en el sentido de una élite opuesta con posibilidades reales de alcanzar el poder por medio de elecciones competitivas). En un principio, la formación de un partido oficial fue un esfuerzo centralizador. Con el tiempo, el partido se convirtió en uno de los instrumentos cruciales del control presidencial; cada presidente lo ha manejado a partir de su propia concepción del proyecto nacional. Sin una vida independiente, el partido ha dependido, casi por completo, del gobierno para su financiamiento. Aunque la adopción de una estructura sectorial semicorporativa contribuyó a ensanchar sus bases de apoyo social, con el tiempo también ha obstaculizado la incorporación de otros grupos, como las mujeres y los jóvenes, y ha impedido el fortalecimiento de las estructuras territoriales. Además, la lógica corporativa ha demostrado ser inadecuada para captar la creciente complejidad social. Sin embargo, mientras la competitividad electoral fue casi inexistente, los costos de confrontar a los sectores excedían los posibles beneficios.

Estos arreglos resultaron adecuados para reproducir el consenso entre las élites, pero tuvieron consecuencias negativas bastante predecibles: la corrupción, el caciquismo, la centralización, el oportunismo, la apatía y el cinismo. Desde 1950 hubo intentos de reforma partidista,

¹¹ Para estudios históricos del PRI véase, entre otros, Luis Javier Garrido, *El partido de la revolución institucionalizada: La formación del nuevo estado en México*, México, Siglo XXI, 1982; Pablo González Casanova, *El estado y los partidos políticos en México*, México, Ediciones Era, 1983; y Arnaldo Córdova, *La formación del poder político en México*, México, Ediciones Era, 1980.

pero todos fueron derrotados. El más significativo fue el emprendido por Carlos A. Madrazo, quien como presidente del PRI en los años 1964-1965 intentó iniciar elecciones primarias directas para elegir tanto a los oficiales del partido como a los candidatos a puestos de elección popular. Sus reformas pronto tropezaron con la resistencia de una coalición encabezada por el gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, y el presidente Díaz Ordaz terminó por despedir a Madrazo. Esta lección no fue desaprovechada por Luis Echeverría, quien prefirió ampliar las bases sociales por medio de la Apertura Democrática y la expansión de la burocracia gubernamental, lo cual le permitió incorporar a una nueva generación de jóvenes con ambiciones políticas. López Portillo también prefirió una reforma más amplia, con la esperanza de que la legalización de diversos partidos de oposición y su participación en la contienda electoral forzase al PRI a desterrar prácticas corruptas y a postular mejores candidatos. En forma paralela se intentaron reformas menores dentro del mismo PRI, tales como la "democracia transparente" en el periodo 1976-1979 y la consulta popular en los años 1983-1985. En ambos casos, los logros fueron efímeros y el partido oficial rápidamente regresó a sus prácticas tradicionales.

El cambio político en México ha tomado diversos senderos. En todos los casos las modificaciones han sido respuestas a problemas subyacentes que complicaban el mantenimiento del *statu quo*. En el cuadro 1 se sintetizan los problemas fundamentales que han conducido a la adopción de cambios políticos, así como las principales rutas que éstos han tomado.¹² Para los objetivos de este ensayo no es preciso discutir cada caso en particular; sólo es necesario destacar la dinámica general. Lo que salta a la vista es que las respuestas a los problemas han tomado tres formas principales. En algunos casos se optó por reformas en el sistema electoral y de partidos. Éstas incluyeron la creación de las diputaciones de partido (1964), la reducción de la edad para el ejercicio de los derechos electorales y cambios en las diputaciones de partido (1970-1973) —ambas bajo los auspicios de la Apertura Democrática—, la Reforma Política (1977) y la Renovación Política (1986). En otros, se insistió en reformar al PRI; éste fue el caso de las elecciones internas de Madrazo, la democracia transparente y la consulta con las bases. Finalmente, también se han adoptado cambios en las políticas de desarrollo y, por ende, en las dimensiones y estructura de la buro-

¹² Una versión distinta de este cuadro se presenta en John J. Bailey, *Governing Mexico: The Statecraft of Crisis Management*, Londres, MacMillan Press, 1988, p. 108. Para una discusión más amplia de las rutas del cambio político delineadas aquí, véase el capítulo 5.

cracia. De esta manera, en tanto que Echeverría dejó atrás el desarrollo estabilizador y se comprometió con el desarrollo compartido, López Portillo tuvo que promover —al menos inicialmente— una alianza para la producción. Por su parte, De la Madrid apoyó el realismo económico, que Salinas ha continuado bajo las directrices de la modernización económica. Cabe resaltar que estas tres opciones de cambio no han sido excluyentes entre sí. De hecho, casi siempre se ha intentado cambiar en más de una dirección. Así, por ejemplo, López Portillo promovió cambios en la legislación electoral, en las prácticas priístas y en la estrategia de desarrollo. Es muy significativo que de las tres vías la que menos éxito ha tenido ha sido la reforma del partido oficial. En todos los intentos de reforma partidista la inercia y los obstáculos de los intereses creados han prevalecido. También es cierto, sin embargo, que hasta hace poco el triunfo electoral del PRI creaba pocos alicientes para su reforma; las élites gobernantes bien podían darse el lujo de contar con un partido de escasa vitalidad interna.

El problema es que la situación actual presenta un reto mucho más serio para el partido. La crisis económica que comenzó en 1982 todavía no está resuelta. La inflación ha bajado y se vislumbran las posibilidades de un crecimiento moderado en el mediano plazo, pero los efectos acumulados de años anteriores permanecen. El salario no se ha recuperado y el desempleo se mantiene; los grandes capitales expatriados todavía no regresan al país y la inversión extranjera aumenta a paso muy lento. Por otra parte, el proyecto salimista implica reacomodos políticos que no deben olvidarse. Uno de los más importantes es el del papel del Estado en la economía y la consecuente disminución de recursos para el clientelismo y el patronazgo. Por otra parte, la crisis de sucesión de 1988 comprometió a Salinas con una reforma política que acomode las nuevas realidades. Independientemente de los efectos últimos de esa reforma, la realidad electoral ha cambiado y demanda mayor competitividad. Por ello, hoy en día la reforma del partido se presenta como una necesidad insoslayable.

Vale la pena recordar que el voto priísta cayó de alrededor del 90% a principios de los sesentas a menos del 70% en 1973. Debido a la ausencia del PAN en la arena electoral en 1976, el voto priísta repuntó, pero en 1979 regresó al nivel que tenía seis años atrás. En las dos elecciones siguientes siguió cayendo poco a poco y en 1988 se desplomó, apenas rebasando la marca del 50%. Más específicamente, el cuadro 2 muestra una rápida desaparición de situaciones monopólicas después de 1976, y la proliferación de escenarios bipartidistas y pluripartidistas. En 1988 no sólo se acentúan estas tendencias, sino que además la incidencia de derrotas priístas crece en forma drástica. De manera más

CUADRO 1
Principales rutas de los cambios políticos en México, 1958-1989

<i>Ruta:</i>		<i>Eventos más significativos</i>				
PRI		Elecciones internas, Madrazo (1965)		Democracia transparente (1978-1979)	Consultas a las bases (1983-1986)	Reforma en curso (1988-)
Sistema electoral y de partidos	Diputados de partido (1963)		Apertura política (1971-1973)	Reforma política (1977)	Renovación política (1986)	Reforma electoral (1989-1990)
Burocracia (políticas de desarrollo)	Desarrollo estabilizador (1955-1970)		Desarrollo compartido (1971-1976)	Alianza para la producción (1977-1981)	Realismo económico (1982-1988)	Modernización económica (1988-)
Problemas fundamentales	Retiro panista de la cámara de diputados (1958)	Movimiento estudiantil (1968)	Protesta rural y urbana (1971-1975)	Candidatura única (1976)	Crisis y recesión (1982-1988)	Crisis de sucesión presidencial (1988)
Problemas adicionales	Movimiento ferrocarrilero (1958)			Devaluación (1976)	Chihuahua (1986)	Reajuste económico (1988-)
Presidencia	ALM (1958-1964)	GDO (1964-1970)	LEA (1970-1976)	JLP (1976-1982)	MMH (1982-1988)	CSG (1988-)

general, hay que resaltar el rápido aumento en el porcentaje de distritos competitivos —con bipartidismo, pluripartidismo y victoria de la oposición—, que pasa de entre 10 y 15% en los sesenta a más del 40% en los ochenta; en 1988, esos distritos alcanzan casi dos terceras partes del total y, aún más significativo, en más del 20% de los mismos triunfa la oposición.¹³ En conjunto, los datos electorales indican que los tiempos de las cómodas mayorías priístas se han quedado atrás. Además, los resultados oficiales se han vuelto motivo de controversia. La oposición ya no está dispuesta a ser un actor pasivo en el proceso electoral; demanda con insistencia una mayor limpieza en los comicios. En la medida en que se tomen resoluciones para garantizarla, el PRI se verá obligado a reformar sus métodos y prácticas políticas.

LA PROBLEMÁTICA DEL CAMBIO ACTUAL

El México contemporáneo es ejemplo de un sistema presidencial que trabaja para modernizar la economía mientras reajusta sus bases de poder y diseña nuevas fórmulas de legitimidad. El proyecto político considera la renegociación de pactos con grupos dentro del partido y el acercamiento a nuevos grupos, tales como la Iglesia católica, los empresarios, y grupos en el exterior (sobre todo en Estados Unidos). Respecto al PRI, los objetivos centrales son armonizar algunos aspectos de la estructura corporativa, conservando las piezas clave de los sectores —por ejemplo los maestros y los trabajadores petroleros—, con una base territorial fortalecida, y reformular la ideología tradicional. Los dirigentes sectoriales están siendo animados para trabajar en su ámbito territorial, donde podrían conservar alguna influencia, pero reforzando la competitividad electoral del partido. El presidente se vale de las presiones electorales para recompensar a los aliados reformistas dentro del partido y castigar a los opositores de las reformas. El gobierno también está buscando acercarse a algunos partidos de oposición, particularmente el PAN, al mismo tiempo que margina a otros, tales como el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, los objetivos precisos del proyecto político se han mantenido relativamente indefinidos, quizá con el fin de facilitar negociaciones. Por ello, no es de

¹³ En este cuadro usamos una metodología similar a la de Federico Estévez. Ver "Por un Partido Revolucionario Institucional sin adjetivos", en *Informe mensual sobre la economía mexicana*, Centro de Análisis e Investigación Económica, vol. 6, núm. 9, noviembre, 1988, p. 19. Sin embargo, nuestro cuadro incluye categorías propias —monopolio y victoria de la oposición— y usa criterios distintos para separar a los distritos bipartidistas y pluripartidistas.

CUADRO 2
Competencia electoral
(Porcentaje de distritos electorales)

Año	Tipo de competencia ^a					
	Monopolio	Hegemonía fuerte	Hegemonía débil	Bipartidismo	Pluripartidismo	Victoria oposición
1964	28.1	52.2	4.5	14.0	—	1.1
1967	24.2	61.2	3.6	9.7	—	1.2
1970	27.0	53.9	1.7	17.4	—	—
1973	18.7	51.3	4.1	21.8	1.0	3.1
1976	35.8	44.6	6.7	11.9	0.5	0.5
1979	9.4	48.0	12.3	6.3	22.7	1.3
1982	1.3	51.7	6.3	26.1	14.0	0.3
1985	3.3	41.7	9.0	21.0	21.3	3.7
1988 ^b	1.0	19.0	15.0	8.3	34.0	22.7

^a Monopolio: si PRI >95%; hegemonía fuerte: si PRI <95% pero >70%; hegemonía débil: si PRI <70% pero la diferencia entre el PRI y el segundo partido es >40 puntos porcentuales; bipartidismo: si PRI <70%, la diferencia entre el PRI y el segundo partido es <40 puntos porcentuales, el segundo partido >25% y el tercer partido <10%; pluripartidismo: si PRI <70%, la diferencia entre el PRI y el segundo partido es <40 puntos porcentuales y el segundo partido <25% o el tercer partido >10%; victoria de la oposición: si cualquier partido >PRI.

^b Para 1988 las victorias de la oposición se calcularon tomando en cuenta coaliciones.

extrañarse que priistas ortodoxos sean nombrados para ocupar puestos clave en el partido, aun a costa de la credibilidad. El proyecto provoca tensiones que van en aumento, como se ha visto tanto en debates políticos recientes como en los procesos de selección de candidatos priistas y en las elecciones. Hasta ahora ha marchado de manera desigual, dependiendo de juicios políticos sobre las fuerzas opositoras y sobre los tiempos propicios para el cambio dentro del PRI. Pero el tiempo es fundamental porque los dirigentes del partido enfrentan la posibilidad de un nuevo desafío electoral en 1991, cuando se renueva la totalidad de la cámara de diputados y la mitad del senado.

La liberalización económica y las medidas adoptadas para promover no sólo la eficiencia sino la productividad han exigido menor intervención estatal en sectores productivos y regulatorios; asimismo han fortalecido las fuerzas del mercado. Las consecuencias se aprecian, por ejemplo, en el aumento de los impuestos y la eliminación o reducción de subsidios a servicios y productos de consumo básico; en la desincorporación de empresas públicas y la reducción del tamaño de la burocracia, y en la promoción de la productividad mediante una disminución del proteccionismo a las empresas nacionales y mayores incentivos para la inversión extranjera directa. Algunos otros cambios paralelos incluyen la reforma a la legislación agraria y laboral, probablemente

a expensas de los intereses de obreros y ejidatarios. Debe insistirse en que dichas reformas tenderán a debilitar las bases del PRI tal y como están constituidas en la actualidad.

En el contexto mexicano la liberalización política significa, entre otras cosas, una mayor competencia partidista, cada vez más significativa para aquellos aspectos de la legitimidad que demandan elecciones y procedimientos democráticos.¹⁴ De esta manera, los priístas reformadores deben diseñar mecanismos más idóneos para la competencia electoral. Desde un punto de vista más amplio, también deben abrir los canales de participación ciudadana dentro del partido y replantear su relación con el gobierno. Como dice Foweraker, “una reforma exitosa requeriría la relegación de muchos intermediarios políticos tradicionales y la incorporación de una nueva generación de profesionistas de clase media representantes de las clases medias urbanas”.¹⁵

Desde una perspectiva comparada, la secuencia entre la liberalización económica y la liberalización política resulta interesante. Al contrario de lo que sucede en la Unión Soviética, donde la *glasnot* se antepone y aun complica la *perestroika*,¹⁶ el gobierno mexicano ha empezado por poner en marcha sus reformas económicas. Parece ser que la “apuesta” presidencial es que las reformas macroeconómicas resten fuerza a los sectores del partido, al mismo tiempo que producen beneficios para todos, como menor inflación y crecimiento económico. Por supuesto, el riesgo es que si la estrategia no funciona, un PRI debilitado podría verse obligado a competir, en términos de mayor igualdad, con una oposición fortalecida por el descontento popular.

La nominación de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial del PRI en octubre de 1987 precipitó la división más importante del partido desde 1952.¹⁷ En oposición a las políticas económicas

¹⁴ Kevin Middlebrook enfatiza la competencia electoral y la arena legislativa. “Political Liberalization in an Authoritarian Regime: The Case of Mexico”, en Guillermo O'Donnell, *et al.* (eds.), *Transitions from Authoritarian Rule: Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 124 y *passim*. Sobre este tema, véase también Wayne Cornelius, “Political Liberalization in an Authoritarian Regime: Mexico, 1976-1985”, en Judith Gentleman (ed.), *Mexican Politics in Transition*, Boulder, Westview Press, 1987, pp. 15-39.

¹⁵ Joseph Foweraker, “Popular Movements and the Transformation of the Mexican Political System”, trabajo presentado en el Center for US-Mexican Studies, Universidad de California, San Diego, 23-25 de marzo de 1986, p. 25.

¹⁶ Véase por ejemplo, William E. Odom, “The Future of the Soviet Political System”, en *P.S.: Political Science and Politics*, vol. 21, núm. 1 (junio de 1989), p. 197.

¹⁷ La nominación de Miguel de la Madrid en 1981 también creó oposición dentro del PRI, especialmente del sector obrero, pero mucho menos significativa que la de Salinas.

gubernamentales y a las prácticas antidemocráticas del PRI, se formó la Corriente Democrática que, expulsada del partido, se alió con los hasta entonces partidos satélites y con el Partido Mexicano Socialista para formar el Frente Democrático Nacional (FDN). Salinas comenzó su campaña como candidato de un partido fragmentado, en un país que había sufrido seis años de austeridad económica. El aspirante priísta abordó la cuestión de la democracia de manera más o menos ortodoxa, destacando la noción híbrida de democracia política y social del artículo 3º constitucional. Desde esta perspectiva, la democracia electoral debe ser edificada sobre bases de mayor igualdad social: “Sin democracia electoral, desvirtuamos el proyecto de la Revolución mexicana. Con democracia electoral nada más, dejamos incompleta y fracturada la ideología de la Revolución.”¹⁸ Sin embargo, ya desde entonces se notaba un mayor énfasis en el aspecto puramente electoral, quizá como consecuencia de la crítica a las elecciones en el sexenio de Miguel de la Madrid. Las condiciones del triunfo de Salinas en las elecciones de 1988 también propiciaron este nuevo énfasis en la democracia electoral. Así, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, propone un “acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática” en el cual predomina la dimensión política y en particular, la electoral. Este acuerdo reconoce la nueva realidad, electoral y la necesidad de reformar las normas y prácticas prevaecientes, para darle una mayor “confiabilidad al proceso en su conjunto”.¹⁹

Con respecto al PRI, Salinas ha reconocido la importancia de los sectores pero también ha subrayado la necesidad de modernizar las estructuras y prácticas del partido con el fin de fortalecer sus bases, elegir mejores candidatos, recompensar a los militantes del partido y responder con mayor flexibilidad a una sociedad mucho más compleja. Ha afirmado, incluso, que “en su modernización, el PRI pasa de ser partido del gobierno a partido en el gobierno”.²⁰ Sin embargo, el cambio debe ser promovido sin fracturar la unidad partidista, columna vertebral de la estabilidad social. Esta preocupación por la unidad y la estabilidad es mayor últimamente, quizá a consecuencia de la rápida y, en algunos casos, violenta caída de los gobiernos comunistas de Europa del Este. En la salutación a los priístas a principios del año, el presidente Salinas insistió en que los cambios políticos deben ser implantados a la velocidad que marquen los propios mexicanos y con el talento ne-

¹⁸ Carlos Salinas, discurso en la reunión de síntesis sobre la democracia y la descentralización, Puebla, 22 de abril de 1988.

¹⁹ Ver *Plan Nacional de Desarrollo [1989-1994]*, capítulo 4.

²⁰ *Excelsior*, 14 de diciembre de 1989, p. 1.

cesario para mantener la unidad. En su opinión, quienes lo han tratado de hacer de otra manera “viven hoy los riesgos de la guerra civil”.²¹ Como era de esperarse, estas declaraciones produjeron reacciones encontradas dentro del PRI. Mientras que unos —los menos— las interpretaron como un llamado a que el partido encabezara el cambio en forma activa, otros —los más— las tomaron como un signo de alerta frente a cualquier cambio. En balance, el discurso del primer mandatario parece haber favorecido el *statu quo*.

Si las declaraciones de Salinas sobre la democracia han insistido en las elecciones, sus comentarios en torno al partido también han ido más allá del lenguaje reformador típico. Aun así, el restablecimiento de la autoridad presidencial ha requerido de acciones extraordinarias. La primera fue obligar a su propio partido a aceptar una simple victoria mayoritaria en los comicios de julio de 1988, oponiéndose de esta manera al amplio margen que muchos demandaban con el fin de poder responder a sus compromisos políticos. Al tomar posesión con un partido fragmentado y desalentado, Salinas se enfrentó a una oposición robustecida que amenazaba con tomar el control de la agenda política. Su determinación para hacer frente a Joaquín Hernández Galicia “La Quina” en enero de 1989 consolidó su autoridad. Apoyado por enormes recursos sindicales, La Quina había retado a De la Madrid, quien optó por acomodarse a sus demandas; pero la nominación de Salinas, quien desde su posición como secretario de Programación y Presupuesto se había esforzado por reducir el poderío de Hernández Galicia, condujo a un enfrentamiento definitivo. El encarcelamiento de La Quina aumentó rápidamente la popularidad y el poder del nuevo jefe del ejecutivo.

Acciones posteriores, como la de arrestar a algunos “capos” del narcotráfico y a empresarios vinculados con fraudes en la bolsa de valores, reafirmaron la imagen de un presidente enérgico. De manera semejante, Salinas permitió que Jonguitud Barrios fuese derrocado como líder del sindicato de maestros. Aún más importante fue el reconocimiento de la victoria panista en el estado de Baja California. Cabe señalar que si bien estas decisiones aumentaron la popularidad de Salinas y de la presidencia, no parecen haber beneficiado al PRI en la misma medida. Así lo indican varias encuestas realizadas tanto en el Distrito Federal como en el resto de la república. Por ejemplo, una encuesta de *Los Angeles Times* en agosto de 1989 reveló que mientras casi el 80% de los encuestados expresó opiniones favorables acerca del presidente, sólo la mitad expresó lo mismo del PRI.²²

²¹ *Excelsior*, 4 de enero de 1989, p. 14.

²² *Los Angeles Times*, 20 de agosto de 1989, p. 1.

Salinas nombró a Luis Donald Colosio, senador por el estado de Sonora, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. Colosio, considerado un "salmista de hueso colorado", es el prototipo del tecnócrata, educado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la universidad de Pennsylvania, con una corta carrera en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Su estrategia ha consistido en promover, aunque con poco vigor, una mayor democracia dentro de los grupos que integran los sectores del PRI, buscando además consolidar la base territorial mediante la selección democrática de funcionarios del partido y de candidatos a cargos públicos locales. Una democracia más amplia dentro de los grupos, en combinación con estructuras territoriales activas, impulsaría el esfuerzo por promover a dirigentes más genuinos, capaces de competir de manera más efectiva en las elecciones. Los funcionarios del partido que resultaran electos en el ámbito local, serían convocados entonces para conducir los asuntos del partido en el estado, y posiblemente se postularían como candidatos para las legislaturas correspondientes. Todos estos cambios serían ratificados en asamblea nacional, en un principio prevista para finales de 1989, pero ahora postergada hasta fines de 1990 debido a las dificultades del liderazgo priista para conciliar todos los intereses en juego. En este sentido es muy revelador que la XIV reunión del consejo nacional, convocada en noviembre de 1989 para fijar la fecha de la asamblea nacional, haya terminado sin cumplir este objetivo.

Hasta ahora Colosio no ha hecho explícita la estrategia del cambio. En repetidas ocasiones, el presidente del CEN ha hablado de manera general sobre la necesidad de democratizar los procesos internos del partido, de fortalecer las estructuras territoriales y de promover un mayor compromiso social. Sin embargo, también ha hecho hincapié en que es preciso mantener los sectores.²³ Al hablar de la reforma ante el XIV consejo nacional, el senador sonorensé se limitó a esbozar los retos del partido. En su opinión, éstos son cuatro: dejar de ser la voz del gobierno para volverse la de la sociedad, mejorar los canales de representación, mejorar la competitividad del partido y fortalecer su imagen.²⁴ Por ello, en tanto exista una estrategia de reforma ésta debe inferirse de los cambios que se intenten llevar a cabo.

Cuando los cambios son importantes, tropiezan con los intereses de dirigentes sectoriales, así como con los de políticos y caciques locales. El sector obrero es el más intransigente; dado que su fuerza está

²³ Ver por ejemplo la entrevista publicada en *El Nacional*, 11 de mayo de 1989, p. 15.

²⁴ *Excelsior*, 26 de noviembre de 1989, p. 42.

concentrada en algunas cuantas áreas urbanas, es de esperarse que pierda peso político si la base territorial del partido se fortalece. Este sector considera al proyecto de liberalización como una amenaza para su ideología y sus intereses materiales. Por ello, los dirigentes obreros, que han prosperado en forma personal merced a los arreglos vigentes, luchan tenazmente contra el cambio.²⁵ El sector campesino podría mantener su número de puestos electorales, pero el relajamiento de controles podría desatar rivalidades entre facciones en los ámbitos local y regional. Algo semejante ocurre en el sector popular, con la diferencia de que su propia heterogeneidad lo hace más maleable. Desde la década de los cuarentas, caciques estatales y locales han forjado complejos acuerdos sobre la distribución de posiciones políticas, mismas que no están dispuestos a ceder sin una batalla previa. A pesar de incorporar a sectores cada vez más importantes desde el punto de vista electoral, ni las organizaciones femeninas ni las juveniles han influido tanto como las otras en la política nacional.

Un nuevo actor en el debate es la Corriente Crítica, creada en el mes de octubre de 1987 por Rodolfo González Guevara,²⁶ un respetado priista con una larga trayectoria política. González Guevara ayudó a organizar la Corriente Democrática, pero la abandonó cuando ésta fue expulsada del partido ya que él ha reiterado que el cambio debe gestarse, en primer término, dentro del propio PRI. La Corriente Crítica ha insistido en una mayor democracia dentro y fuera del partido, en un regreso a los postulados ideológicos de la Revolución mexicana, en una separación entre el PRI y el gobierno y en una actitud más crítica de los miembros del partido hacia el gobierno. Estas propuestas han tenido gran resonancia entre muchos jóvenes, inconformes con la falta de canales de acceso a puestos directivos y con la imposición de dirigentes dentro del Frente Juvenil Revolucionario. La inconformidad de estos jóvenes estalló en octubre del año pasado, cuando una reunión de la juventud priista presidida por Colosio tuvo que ser interrumpida por enfrentamientos entre los simpatizantes de la Corriente Crítica y los seguidores del presidente del partido.²⁷ Aunque es difícil saber cuál será el papel de la Corriente Crítica en el proceso de reforma partidista, bien pudiera convertirse en un medio para aglutinar a los

²⁵ De hecho, el sector obrero ha sugerido un aumento en el peso de los sectores mediante la reducción del número de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que incluiría solamente un presidente, un secretario general y un representante de cada uno de los tres sectores.

²⁶ González Guevara ha defendido sus posiciones políticas en ensayos publicados en *Excelsior*.

²⁷ *El Universal*, 21 de octubre de 1989, p. 1.

priistas que buscan promover el cambio, así como en un instrumento con el cual el liderazgo priista pueda enfrentarse indirectamente a los que se oponen a la reforma.

Dentro de las filas del PRI se encuentran también militantes que, sin pertenecer a la Corriente Crítica, apoyan cambios dentro del partido. Ellos se han dado en llamar a sí mismos neopriistas.²⁸ El más prominente es Julio Hernández, secretario adjunto de Programas Especiales del CEN, quien ha coordinado la elaboración de estudios críticos y promovido la creación del movimiento denominado Nuevas Expresiones Políticas.²⁹ En muchos casos las posiciones de estos priistas coinciden con las de la Corriente Crítica, pero sus críticas a la cúpula priista y a la presidencia de la república son menos agresivas. En política económica, tienden a favorecer un cambio en el papel del Estado; por ello apoyan una adecuación de los documentos partidistas a las nuevas exigencias económicas. Sus problemas fundamentales son la falta de organización formal y una nebulosa relación con el liderazgo oficial del partido; sus intenciones parecen ser sinceras, pero no gozan de mucha fuerza para impulsar el cambio.

En mayor o menor grado, todos los reformistas —e incluso el propio Colosio— han insistido en una mayor independencia frente al gobierno. Esto no es sorprendente dadas las crecientes tensiones entre las políticas económicas del gobierno y los principios ideológicos del PRI. Para muchos, la debacle electoral del PRI en 1988 no fue sino la consecuencia de la austeridad y los reajustes económicos del sexenio anterior. Paradójicamente, ahora la situación parece haberse invertido; los vicios priistas se están convirtiendo en un lastre para la presidencia. De cualquier manera, separar al PRI del gobierno es complicado, por simples razones financieras. Por lo general, tanto los costos de la burocracia permanente del partido como los de naturaleza puramente electoral, han sido sufragados en un alto —si bien indeterminado— porcentaje por el gobierno.

Desprovisto de estos fondos, el PRI bien podría perder muchos de sus miembros —que tendrían que pagar cuotas— así como su capacidad de movilización electoral. El efecto final es impredecible, pero evidentemente riesgoso. Por otra parte, no está claro que el gobierno quiera perder su control sobre el partido, menos aún si se toma en

²⁸ El término neopriismo fue acuñado por Agustín Basave Benítez en sus artículos publicados en *Excelsior*.

²⁹ Sobre este movimiento véase por ejemplo, *Excelsior*, 18 de noviembre de 1989, p. 1; *El Financiero*, 7 de diciembre de 1989, p. 42; y *Proceso*, 18 de diciembre de 1989, p. 6.

cuenta que esto podría resultar en una mayor combatividad de las organizaciones obreras. Por ello, una verdadera transición de partido del gobierno a partido en el gobierno no parece ser muy factible en el corto plazo. Lo que sí es posible —y de hecho ya se ha dado en algunos casos— es una actitud más crítica del PRI frente a decisiones gubernamentales.³⁰ También parece ser factible una mayor independencia de las organizaciones priistas municipales y estatales con respecto a presidentes municipales y gobernadores.

La escena se complica porque los reformistas económicos y políticos no siempre son los mismos. Muchos de los reformistas en la esfera política se muestran contrarios a los planes de modernización económica de Salinas, como el propio González Guevara. Además, no todos los nuevos tecnócratas deben ser considerados políticamente progresistas.³¹ Peor aún, la mayoría de los priistas evita expresar sus opiniones en público, lo cual dificulta su identificación dentro de las distintas coaliciones.³²

Las reformas se discutieron en términos muy francos en la reunión extraordinaria del consejo nacional en marzo de 1989. Miembros de la Corriente Crítica, neopriistas y dirigentes sectoriales debatieron abiertamente sobre la necesidad y posible orientación de la reforma del partido. El líder del gremio obrero, Arturo Romo Gutiérrez, encabezó la defensa de los sectores. El malestar del PRI, según Romo, deriva de que el partido abandona su base ideológica y relega los intereses sectoriales. En consecuencia, “la opinión de los tres principales sustentos del PRI debe de ser decisiva para determinar líneas y directrices políticas del partido”.³³ La reforma debe hacer hincapié en la autonomía del partido frente al gobierno, en eliminar la corrupción y en apoyar las demandas reales de la población. En todo esto, Romo fue secundado por los delegados de los sectores campesino y popular. Como era

³⁰ En este sentido vale la pena recordar la posición del PRI respecto de Cananea, Imecafé y las alzas en las tarifas de algunos servicios públicos. Ver por ejemplo *El Universal*, 10 de diciembre de 1989, p. 1.

³¹ Esta diversidad de opiniones sobre política económica también se presenta entre las masas. Jorge Domínguez, en “La opinión pública en México frente a la crisis económica: la víspera de la elección presidencial de 1988”, septiembre de 1989, *mimeo.*, reporta que no todos los simpatizantes del entonces candidato a la presidencia, Carlos Salinas, compartían opiniones sobre la política económica.

³² Un reformador ha dicho que una de las mejores técnicas para detectar “dinosaurios” es contar las veces que un priista insiste en que no hay divisiones dentro del partido. “Divergencias en el PRI por reforma electoral”, *La Jornada*, 11 de septiembre de 1989, pp. 1, 8.

³³ Arturo Romo Gutiérrez, citado en *El Universal*, 3 de marzo de 1989, p. 1.

de esperarse, los representantes de los comités estatales, así como algunos grupos juveniles y de mujeres, se manifestaron en contra de la dominación del partido por los sectores.

La controvertida reforma es difícil desde cualquier punto de vista, empezando por la democratización de los grupos que integran a los sectores. Aunque las organizaciones obreras y campesinas son las más controladas, la mayoría de los grupos del sector popular también se resiste al cambio. Silvia Hernández, dirigente nacional de la CNOP, ha aceptado la oposición a la modernización por parte de algunos líderes dentro de su confederación. González Guevara lo ha señalado de manera más clara: “. . . los enemigos del cambio son, desafortunadamente, los poderosos dirigentes de los distintos sectores”.³⁴

De los tres sectores el más maleable es el popular. No es de extrañarse, por tanto, que la dirección priista lo haya seleccionado para iniciar los cambios. En su XLVII consejo nacional, convocado en febrero del presente año, la CNOP decidió reorganizar al sector con base en cinco grandes “movimientos”: el sindical, el de organizaciones populares, el de profesionales, técnicos e intelectuales, el urbano popular, y el ciudadano. La reorganización definitiva del sector popular no se llevará a cabo sino hasta mediados de año, cuando se reúna la asamblea nacional de la CNOP.

Sin embargo, los cambios anunciados permiten identificar tres objetivos. Primero, hay un deseo de vincular al partido a toda esa gama de movimientos populares que han proliferado en los grandes centros urbanos durante esta década y que han sido renuentes a cualquier tipo de lazo formal con partidos políticos. El objetivo es acercarlos de manera informal para que utilicen al partido como intermediario en su relación con las instancias gubernamentales. Por lo tanto, el éxito de esta estrategia dependerá, en un alto grado, del acceso del partido a recursos públicos. Segundo, hay un intento de diluir el poder de los sindicatos —principalmente los de burócratas— e integrarlos en uno de los cinco grandes movimientos o subsectores. Es esta estrategia la que más ha preocupado a los líderes obreros y campesinos, quienes de inmediato expresaron su inconformidad ante la reestructuración.³⁵ Finalmente, se busca fortalecer las organizaciones territoriales del partido, que tendrán que ser la base de todos los movimientos salvo el sindical, con el fin de lograr mayor penetración social y competitividad electoral.

³⁴ González Guevara, citado en *Uno más Uno*, 25 de febrero de 1989, p. 6. Ver también *El Universal*, 11 de mayo de 1989, pp. 1 y 20.

³⁵ Ver *Excelsior*, 25 de febrero de 1990, pp. 4 y 9.

LAS ELECCIONES LOCALES, EL PRI Y LOS IMPERATIVOS DE LA REFORMA

Mientras en la ciudad de México sigue el debate sobre la reforma, la lucha política continúa en el ámbito local a lo largo de todo el país. No se ha reportado mucho sobre los sectores obrero y campesino, por lo que se puede pensar que sus líderes se aferran al control tradicional. En cambio, el sector popular se mantiene más activo. En el estado de Nuevo León, por ejemplo, la CNOP recurrió a elecciones abiertas en diversas localidades para renovar a sus cuadros dirigentes. Aunque este experimento funcionó bastante bien en la mayoría de las poblaciones, en Monterrey el proceso condujo a la formación de alianzas complejas y a protestas.

La reforma del PRI depende estrechamente del grado de competencia electoral. Desde su retroceso en los comicios de julio de 1988, el PRI ha recuperado votos en estados tradicionalmente priistas, donde por lo general había recibido votaciones de cerca del 90%.³⁶ Así, por ejemplo, en las elecciones locales de julio de 1989 realizadas en los estados de Campeche y Zacatecas, el PRI logró captar más del 80% del sufragio, con lo que superó en cerca de 10 puntos porcentuales los resultados de 1988. Aunque sin llegar al 80%, en Oaxaca y Veracruz también pudo recuperar más de 10 puntos. En estas entidades la recuperación refleja, sobre todo, un menor apoyo al cardenismo y el retorno de maquinarias locales electorales al PRI, partido que sigue contando con los mayores recursos económicos. La caída del voto por el PAN en estos estados, en muchos casos similar a la de la izquierda, sugiere que el regreso de las maquinarias locales al PRI también pudo haber operado en contra de aquel partido. Sin embargo, como Acción Nacional tiende a obtener la mayor parte de su apoyo de los estratos medios y altos —menos influidos por arreglos clientelistas— la baja en el voto panista puede haber sido también el resultado de una preferencia estratégica de algunos de sus simpatizantes que, amenazados por una izquierda robustecida y cautivados por las políticas salinistas, decidieron apoyar al PRI.

Hasta 1988 Michoacán también había sido un bastión priista; aun en su peor año electoral (1985), el PRI obtuvo más del 70% del voto. Pero con el surgimiento del cardenismo el PRI vio caer su porcentaje

³⁶ Nuestros datos electorales provienen de las siguientes fuentes: en el caso de elecciones federales, de los diarios de debates de la cámara de diputados; en el caso de las estatales o municipales, de *Las razones y las obras: gobierno de Miguel de la Madrid*, México, D.F., Presidencia de la República y FCE, 1988, del suplemento especial de *Nexos*, 141, septiembre de 1989, y de información proporcionada por la Secretaría de Acción Electoral del PRI.

a menos del 30% en los comicios de 1988. Desde entonces se han realizado votaciones para diputados locales y ayuntamientos. Los resultados oficiales de las elecciones para diputados locales (julio de 1989) demuestran que si bien al PRD le fue mucho mejor que a cualquier otro partido de oposición, al PRI le fue todavía mejor. En efecto, mientras que éste duplicó su votación, aquél perdió más de 20% de los votos que obtuvo el Frente Democrático Nacional (FDN) en 1988. Aun así, el PRD fue capaz de alcanzar el 40% del sufragio, lo cual sugiere que por lo menos en este estado el cardenismo será una fuerza política que deberá ser tomada en serio. Las elecciones para ayuntamientos (diciembre de 1989), en las que el PRD también obtuvo más del 40% del voto, confirman esta tendencia.

Michoacán se distingue además por fuertes protestas postelectorales. Quienes reclaman fraude han argumentado que el PRI desea demostrar que el cardenismo no es una opción política; en su opinión, el fraude es una represalia del gobierno por la negativa de Cárdenas a negociar después de las elecciones presidenciales. De cualquier manera, los cardenistas han respondido violentamente, ocupando presidencias municipales, obstruyendo carreteras y negándose a participar en la calificación de las elecciones. Estas mismas reacciones se han observado en Guerrero, donde el PRD también cuenta con un apoyo importante.³⁷ A pesar de las protestas, otros actores políticos como la Iglesia católica y los empresarios, quienes en 1985 y 1986 vociferaron contra el fraude electoral, ahora han permanecido al margen de los conflictos.³⁸

En contraste con lo sucedido en Michoacán, en algunos estados con menor tradición priista el PRI ha ganado de manera más o menos convincente. De todos ellos Chihuahua es, sin duda, el que más llama la atención ya que en 1983 el PRI había perdido los municipios más importantes —correspondientes a cerca del 70% de la población estatal— y en 1986 la “recuperación” priista se había visto empañada por fuertes críticas y protestas de fraude electoral. En esa entidad el PAN era la principal fuerza opositora y su votación mostraba una curva ascendente. En este contexto, el desempeño del PRI durante las elecciones de 1989 significó una mejoría considerable. Diversos factores lo ex-

³⁷ Aunque de manera mucho más limitada, la protesta electoral también ha tenido sus orígenes en alegatos de fraude por parte del PAN. El incendio del palacio municipal en Culiacán, Sinaloa, el 1 de diciembre de 1989, ha sido la protesta más significativa de simpatizantes panistas.

³⁸ El contraste con Chihuahua en 1986 es notable. La principal diferencia es, por supuesto, que en aquella ocasión la fuerza opositora era del PAN y ahora en Michoacán y Guerrero es del PRD.

plican, desde el buen desempeño del gobernador hasta las divisiones dentro del PAN. Sin embargo, lo más significativo fue que el liderazgo priista había decidido que Chihuahua sería el escenario de prueba de su potencial para reformarse y competir en el terreno electoral.

La oposición en Chihuahua, manifiesta en las elecciones, obligó al PRI a cambiar sus estructuras y prácticas. Después de los comicios de 1988, se emprendió una reforma general que comprendía la modernización de la propaganda y de las técnicas de comunicación masiva. Otras medidas adoptadas durante 1989 incluyeron la elaboración de un registro detallado de partidarios, diversos procedimientos abiertos de selección de candidatos, la movilización de simpatizantes durante las elecciones, la vigilancia de casillas electorales y la protección del sufragio. De todas éstas, la más importante fue la adopción de métodos democráticos para seleccionar candidatos, que representó una desviación de la práctica tradicional de las designaciones.³⁹ La fórmula adoptada para las asambleas asignó sólo el 49% de la votación a las organizaciones sectoriales, en tanto que el 51% fue reservado para las territoriales.⁴⁰ En síntesis, el objetivo fue mejorar la calidad de los candidatos priistas al hacer su designación menos dependiente de negociaciones cupulares que de su cercanía con el electorado. Las experiencias de 1983 y 1986, así como la determinación del liderazgo nacional para mejorar la fortuna electoral del partido, dejaron poco espacio a los grupos locales y dirigentes sectoriales para oponerse a los cambios. Ciertamente hubieron quejas, pero al final todos tuvieron que aceptar. El hecho de que Chihuahua fuese presentado como un experimento más que como un patrón generalizable a toda la República ayudó a apaciguar las inquietudes de los conservadores. De manera gradual —y selectiva— estas estrategias electorales se han ido extendiendo a otros estados.

El éxito de Chihuahua se vio opacado por la derrota histórica del PRI en Baja California, en donde la oposición —tanto de izquierda como de derecha— siempre ha sido fuerte. De hecho, en 1988, el movimiento cardenista alcanzó más del 30% de la votación y desplazó al PAN como segunda fuerza electoral. Sin embargo, para las elecciones estatales de 1989, la izquierda, gracias a sus divisiones, no pudo nominar candidatos comunes. Además, la candidata del PRD para la gubernatura, Martha Maldonado, generó controversias y críticas por sus su-

³⁹ El programa electoral se esboza en un documento inédito elaborado por el Comité Directivo Estatal del PRI.

⁴⁰ Ver Javier López Moreno, "Claves en Chihuahua", en *La Jornada*, 21 de julio de 1989, p. 7.

puestas vinculaciones con la izquierda radical durante su juventud: El PRI no pudo aprovechar la caída del voto cardenista, en gran parte por el nepotismo y corrupción de los anteriores gobiernos priistas, lo cual refuerza los argumentos en favor de una mayor independencia de las organizaciones priistas estatales frente a los gobernadores. Nuevamente, en contraste con Chihuahua, en Baja California el PRI confió en los métodos tradicionales para la selección de sus candidatos. El PAN, por el contrario, nominó candidatos atractivos con fuertes vínculos locales. Gracias a su juventud, a su entusiasmo y a su desempeño como alcalde de Ensenada, Ernesto Ruffo fue un oponente formidable para el PRI.

El reconocimiento de la victoria panista favoreció el esfuerzo del presidente Salinas por aumentar su legitimidad tanto dentro como fuera del país. Los costos de un fraude hubiesen sido muy altos, dada la indiscutible fuerza electoral del PAN, su organización y su capacidad para vigilar el cómputo de la votación, así como la proximidad de Baja California a la frontera. No obstante, que el presidente reconociera la victoria de la oposición generó tensiones dentro del PRI. Por algún tiempo, las organizaciones locales del partido se negaron a admitir la derrota de su candidata, y apoyaron múltiples manifestaciones de protesta. Al mismo tiempo, algunos dirigentes obreros amenazaron con formar un nuevo partido si el PRI “abandona la lucha de la clase trabajadora, y la derecha obtiene más posiciones”.⁴¹ Independientemente de estas declaraciones, el hecho es que el fracaso electoral ha complicado el control priista de sindicatos y organizaciones campesinas.⁴²

La reciente experiencia electiva nos sugiere, en primer lugar, que el PRI puede recuperar algo del terreno perdido durante 1988. Sin embargo, dado que en aquellos lugares donde ha mostrado franca recuperación el PRI todavía no alcanza la votación que tenía antes de 1988, es de esperarse que las contiendas electorales futuras sean más reñidas que en el pasado. Segundo, las recientes elecciones sugieren además que el PRI necesita mejorar los procesos de selección de sus candidatos, prestando mayor atención a sus vínculos con el electorado. En tercer término, las votaciones revelan que los procedimientos tradicionales ya son obsoletos. Las normas y prácticas plebiscitarias deben ser reformadas con criterios de mayor equidad y honestidad. Finalmente, es de esperarse que los pasos en esta dirección agraven las tensiones dentro del partido oficial.

⁴¹ *El Universal*, 7 de julio de 1989, p. 7.

⁴² Véase Francisco Ortiz Pinchetti, “Vísperas de la toma de posesión en Baja California”, *Proceso*, 23 de octubre de 1989, p. 10.

UNA NUEVA REFORMA ELECTORAL

La necesidad de reformar las mencionadas normas y prácticas se hizo patente en las elecciones generales de julio de 1988. A pesar de que oficialmente la oposición recibió porcentajes de votación y de curules legislativas sin precedentes, la limpieza y transparencia del proceso no fueron aceptadas. La “caída” de los sistemas de cómputo a escasas horas de iniciado el conteo oficial fue un claro reflejo de la obsolescencia del sistema electoral vigente. La fuerza de las protestas y el difícil proceso de calificación de los comicios en el Colegio Electoral apuntaban hacia una nueva —y más profunda— reforma. El mensaje era evidente y así lo entendió Salinas, quien, como ya se dijo, empezó a subrayar la importancia de la dimensión electoral en la democracia y a reconocer la necesidad de generar confianza en los procesos de votación.

Para lograr este objetivo, en su discurso de toma de posesión el presidente Salinas convocó a los partidos políticos a presentar sus puntos de vista ante la Comisión Federal Electoral. Con posterioridad se les invitó a presentar sus iniciativas de reforma constitucional y legal ante la cámara de diputados. De todos los partidos de oposición con registro sólo el PAN presentó proyectos completos de reformas a la Constitución y al Código Federal Electoral; los demás se limitaron a proponer algunas enmiendas constitucionales y modificaciones al Código. A diferencia de reformas anteriores, en esta ocasión el ejecutivo federal no presentó ningún programa. Es difícil saber hasta qué punto lo propuesto por el PRI representa la posición del ejecutivo, pero el surgimiento de algunas diferencias posteriores entre ambos sugiere poca influencia directa del presidente en el proyecto de reforma electoral de su partido.

En un principio, el Revolucionario Institucional ofreció poco a la oposición. Su mayor concesión fue la de aceptar con algunos límites la representación proporcional en el senado. Como siempre, la estrategia consistía en ofrecerle una mayor representación a la oposición a cambio del mantenimiento del control priísta sobre el proceso electoral. Sin embargo, esta vez la táctica no tuvo los efectos esperados; los partidos de oposición rechazaron la propuesta. Tanto el PAN como el PRD fueron reduciendo sus demandas de manera gradual hasta convergir en una sola: la neutralidad de los organismos encargados de organizar y calificar las elecciones.⁴³

⁴³ Para un análisis detallado de las diferentes propuestas de reforma ver “La reforma electoral: un voto particular a favor”, *Informe mensual sobre la economía mexicana*, vol. 7, núm. 9, noviembre de 1989, pp. 15-21.

Después de largas y poco exitosas negociaciones, el PRI y el PAN se aliaron repentinamente y aprobaron una serie de modificaciones constitucionales que habrán de servir de base para la reforma de la legislación electoral. Vale la pena destacar que el apoyo del PAN se logró mediante una “carta de intención” entre la dirigencia de ese partido y la Secretaría de Gobernación; dicha carta compromete al gobierno con modificaciones precisas del Código Federal Electoral. El balance final para el PAN —y para la oposición en general— depende de que el PRI respete las modificaciones acordadas. Al principio el PRI negó la existencia de cualquier tipo de compromiso con el PAN; sin embargo, quizá por insistencia del ejecutivo federal, a finales de febrero del presente año reconoció públicamente la carta.⁴⁴ No está claro qué ganaría el régimen si renunciara a su compromiso con el PAN; acabaría por desacreditar a sus más importantes interlocutores. Todo indica que las preocupaciones del PAN serán tomadas en cuenta para elaborar la legislación electoral. Aun así el liderazgo panista ha sido objeto de fuertes críticas no sólo por parte de otros partidos de oposición, sino también de un grupo importante de sus propios militantes.⁴⁵

Para evaluar las posibilidades de reforma interna del PRI es necesario analizar dos cuestiones. Por un lado, la aceptación de una “cláusula de gobernabilidad”, que asegura una mayoría automática en la cámara de diputados para el partido que obtenga más triunfos uninominales. A diferencia de la cláusula de 1986, la recién adoptada específica que sólo se aplicará si el partido triunfador obtiene un mínimo del 35% del voto. Aun así esta disposición viola el principio de proporcionalidad y por eso ha sido duramente criticada. Sin embargo, la mayoría artificial que está destinada a producir bien podría operar en beneficio de una mayor limpieza electoral, que le permita al PRI mantener el control de la cámara baja incluso aceptando conteos más escrupulosos. Por otro lado, este efecto podría desalentar la reforma interna del partido ya que con una mayoría asegurada hay una menor necesidad de una reforma a fondo.⁴⁶ La interpretación que haga el PRI de esta cláusula dependerá de lo que opine el ejecutivo federal. Si el presidente deja claro que está dispuesto a aceptar el veredicto del electorado —precisamente por tener casi asegurada una mayoría en la cámara de diputados— el ímpetu para la transformación del partido aumentará.

⁴⁴ Ver *Excelsior*, 24 de febrero de 1989, p. 1.

⁴⁵ La crítica dentro del PAN ha provenido principalmente del grupo vinculado con el ex dirigente nacional del partido, Pablo Emilio Madero. Ese grupo incluye personalidades como Bernardo Bátiz, Jesús González Schmall y José González Torres.

⁴⁶ “La reforma electoral: un voto particular a favor”, *op. cit.*, pp. 19-20.

Existen también reformas tendentes a asegurar una mayor neutralidad de los organismos electorales, cuyas consecuencias dependerán del grado en que se incorporen las propuestas panistas en la legislación electoral. Los cambios constitucionales amplían el tribunal electoral y le conceden mayores facultades jurisdiccionales. Además, hacen necesaria una mayoría calificada —dos terceras partes— en el Colegio Electoral para revocar las decisiones del tribunal. La clave reside, sin embargo, en la composición de los órganos electorales y en este renglón la Constitución todavía deja un amplio margen de maniobra al gobierno. La propia carta de intención no es del todo clara en lo que concierne al número de integrantes del consejo electoral —que sustituirá a la Comisión Federal Electoral— y a la forma de seleccionar a los magistrados del propio consejo y del tribunal. Lo que sí queda claro es que, de aceptarse los términos de la carta, el PRI perdería el control directo de las comisiones distritales y estatales; esto es, no contaría con una mayoría prefigurada en los órganos de recuento que revisan las actas de casilla.⁴⁷ Aunque legalmente las decisiones de esos órganos podrían ser alteradas en la instancia superior, una revocación masiva sería muy costosa en el terreno político. Es de esperarse que este aumento en los costos de la manipulación electoral contribuya a una mayor imparcialidad en el escrutinio, lo cual obligaría al PRI a mostrar una mejor disposición para la competencia.

CONCLUSIONES

Los cambios que actualmente se aprecian tendrán que afectar el funcionamiento del PRI. Los fundamentos de la legitimidad del régimen se han erosionado. Tasas de crecimiento económico como las experimentadas hasta principios de la década de los ochenta no parecen ser factibles en el corto y mediano plazos. La liberalización económica de Salinas actúa en contra de las bases tradicionales del PRI y contradice su proyecto populista. La sociedad demanda cada vez con más insistencia la plena legitimidad electoral de las autoridades; al mismo tiempo, los procesos electorales han ido adquiriendo más competitividad. Las épocas de cómodas mayorías priístas han quedado atrás. Muchas

⁴⁷ Tomando como base los porcentajes de votación de las elecciones de julio de 1988, estos órganos contarían con 10 miembros nombrados por los partidos más cinco escogidos al azar. Del total de quince, al PRI le corresponderían cuatro por haber obtenido más del 30% de la votación y, por simples probabilidades estadísticas, uno más de los cinco seleccionados por sorteo. Así, contaría con cinco de quince representantes.

de las victorias del PRI desatan reclamos y protestas que les restan credibilidad. Por ello se ha tenido que reformar el sistema electoral. Aunque la reforma no llegó tan lejos como era de esperarse, sí introdujo cambios que demandarán más honestidad y una mayor equidad electoral.

Aunque no ha sido discutida en este ensayo, la dinámica demográfica también apunta en dirección del cambio. Cabe recordar que en México más de la mitad de la población tiene menos de 18 años. El PRI siempre se ha preocupado por su poca presencia entre la juventud; las encuestas realizadas confirman una escasa simpatía por el PRI entre los jóvenes de 18 a 25 años de edad.⁴⁸ Tan importante es la urbanización, que históricamente ha estado vinculada en forma negativa con el apoyo al PRI.

Al mismo tiempo grandes agrupaciones humanas se están concentrando en los "pueblos jóvenes" que han crecido en zonas cercanas a las ciudades. Formados en gran parte por inmigrantes rurales de bajos ingresos, las demandas políticas de estos asentamientos son por la regulación de la tenencia de la tierra y la obtención de servicios públicos, como agua potable, escuelas, protección policial, caminos pavimentados y atención a la salud. Además, dado el lento crecimiento económico, las fuentes de empleo se localizan cada vez más en sectores informales, en los cuales los sindicatos obreros tienen poca influencia.⁴⁹ Las implicaciones de esta situación se ven reflejadas en la demografía electoral, que señala un creciente voto de oposición en las zonas urbanas.

En términos de conservación del poder, estas tendencias subrayan la importancia de la estructura territorial del PRI y de la acción recíproca entre la burocracia gubernamental y el partido oficial. Tanto los agentes burocráticos como el partido requieren de flexibilidad, con el fin de identificar y negociar con grupos oficiales y no oficiales, cuyos dirigentes pueden ser lo suficientemente oportunistas para intercambiar apoyo electoral por servicios, a pesar de rechazar vinculaciones formales con el PRI. El Programa Nacional de Solidaridad del presente régimen podría ser una herramienta para apoyar esta estrategia.

⁴⁸ Un análisis secundario de los datos de una encuesta realizada en México durante 1986 por el *New York Times* revela claramente este patrón. Véase John Bailey, "Reform of the Mexican Political System: Prospects for Change in 1987-1988", estudio presentado ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, julio de 1987, anexo B.

⁴⁹ Para un análisis general de estos temas ver Alejandro Portes, "Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Last Decades", en *Latin American Research Review*, vol. 20, núm. 3, 1985, pp. 7-40.

Proceder de esta manera implicaría, sin embargo, reforzar los lazos entre partido y gobierno. En el curso de este trabajo resaltamos las enormes dificultades que enfrenta cualquier intento de transformación del PRI en un partido con vida independiente del gobierno.

Desde el punto de vista puramente electoral el fortalecimiento de las estructuras territoriales es una necesidad apremiante. La distribución sectorial de candidaturas ha sido —y aún sigue siendo— un mecanismo eficaz para reproducir el consenso de los integrantes del pacto corporativo, pero ya no es un buen método para ganar la preferencia de los votantes. En las elecciones del 6 de julio de 1988 los líderes de organizaciones sindicales fueron rechazados de manera singular. Se requieren candidatos que tengan relaciones más estrechas con el electorado, seleccionados en forma abierta por las bases priístas en elecciones primarias o en asambleas del partido. Estos procedimientos no están exentos de riesgos, no sólo por el posible surgimiento de personalidades opuestas a los dirigentes estatales y nacionales, sino también por las divisiones internas que con facilidad pueden surgir en la competencia por las candidaturas del partido. Pero ambos riesgos tienen que ser asumidos en aras de una mayor competitividad electoral.

La distribución sectorial de puestos electorales también podría ser modificada utilizando medidas que aumentasen el peso de los líderes parlamentarios dentro del CEN del PRI. La mayoría de los partidos europeos con bases organizadas de apoyo sindical han neutralizado la fuerza de los sindicatos con la de los dirigentes parlamentarios. Es cierto que en México el principio de la no reelección limita el poder de los diputados y senadores, pero esto podría cambiar dentro del PRI al introducir cambios en el sistema de integración de los comités ejecutivos nacionales y estatales que garantizaran una mayor representación a los legisladores. Por estatutos, sólo un senador y un diputado forman parte, en tal calidad, del CEN del PRI. En la práctica se incluyen a otros legisladores, pero esto queda a discreción del presidente del partido. Para contrarrestar el peso de los representantes sectoriales es necesario que por estatutos el grupo parlamentario tenga garantizados mayores espacios en los órganos directivos del partido.

Cualquier reforma interna se enfrenta a la oposición de los sectores, en particular a la del obrero. No está claro cuáles serían sus reacciones a reformas que lesionen sus intereses en forma directa, pero no es difícil que algunos optaran por una mayor independencia frente al partido. Otros incluso podrían decidir intercambiar su apoyo libremente en el mercado de partidos con aquellos más dispuestos a promover sus intereses. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones sectoriales del PRI se encuentra tan desprestigiada y debilitada por su poca

representatividad y su apoyo incondicional a todo tipo de medidas del gobierno que bien podría no tener más alternativa que aceptar su pérdida de influencia dentro del mismo partido. Lo cierto es que la reforma tiene sus riesgos y, por ello, tanto el presidente Salinas como el dirigente nacional del PRI han insistido en la importancia de los sectores. Se ha buscado introducir las reformas poco a poco para mantener un mínimo de consenso entre los pilares tradicionales del partido.

Los primeros dos años del sexenio son críticos para la reforma del PRI. Son tiempos de altas expectativas puestas en el presidente y su equipo gobernante; también son momentos de poca actividad electoral. Esta actividad se acelera dramáticamente en 1991, cuando todos los diputados federales, la mitad de los senadores y siete gobernadores deben ser electos. En los años siguientes se elegirán gobernadores en los 23 estados restantes y dará comienzo la complicada sucesión presidencial. Por ello, el éxito de cualquier reforma significativa depende de que se adopte antes de que concluya 1990. Hasta ahora se ha procedido con lentitud y sin una estrategia bien definida, al menos públicamente. El presidente Salinas podría acelerar el paso de la reforma si en su intervención programada para el LXI aniversario del PRI en marzo de 1990 apoya el cambio y sugiere las rutas a seguir.⁵⁰ Es de esperarse que así lo haga, porque si bien el mantenimiento del consenso político ha requerido prudencia, la sociedad no espera y demanda una mayor legitimidad electoral. Es evidente que el creciente pluralismo político y la competitividad electoral son, al mismo tiempo, causa y efecto de ese reclamo de legitimidad.

⁵⁰ Este artículo se escribió en febrero de 1990. Desde entonces, el presidente Salinas pareció haberse comprometido más abiertamente con la reforma del PRI al asistir a su LXI aniversario y delinear seis grandes áreas de reforma. Sin embargo, las asambleas seccionales celebradas en mayo con miras a la asamblea nacional tuvieron resultados poco alentadores, ya que muchas de ellas no pudieron ser celebradas por falta de participación de las bases. Las estructuras territoriales simplemente no reaccionaron de la manera esperada por los reformistas. En vista de esto, y dado el objetivo central de limitar el peso de los sectores en las asambleas municipales y estatales (de las cuales saldrá un número considerable de delegados a la asamblea nacional), es posible que en muchos estados el liderazgo nacional del PRI tenga que apoyarse en los gobernadores como contrapeso. Por otra parte, el código electoral propuesto por el PRI ante la cámara de diputados no se apega cabalmente a la carta de intención. A pesar de todo, la necesidad de reformas al partido no ha desaparecido. Mientras esa necesidad sea percibida con claridad por las élites del régimen, es posible que en la asamblea nacional, convocada para el próximo septiembre, las reformas se inicien "desde arriba". La estructura sectorial del partido y la designación por "dedazo" de los candidatos a cargos de elección popular parecen ser los más propicios para la reforma.